

Rentismo, crisis y nueva sociedad.

A propósito de Garay

Salomón Kalmanovitz, 1999.

Publicado en la Revista *Cambio*.

Luis Jorge Garay ha elaborado un pequeño escrito, **La construcción de una nueva sociedad**, para la Revista **Cambio** que me propongo debatir. ¹ Debo decir de entrada que me resulta difícil leer y entender la escritura de Garay. Él ofrece toda una serie de definiciones y categorías panfletarias, como la del rentismo, el neoliberalismo, la desindustrialización, la desagriculturización, la globalización capitalista, que son todas muy contundentes pero lo que hacen es apelar a los instintos de manada y a las inclinaciones paranoicas del lector. No veo el asomo de la razón en su argumentación; no hay una búsqueda por entender y profundizar los tantos problemas que padecemos, sino una serie de acusaciones afebradas en un lenguaje críptico y confuso que insinúa salidas igualmente extremas.

Otro elemento que está ausente en el análisis de Garay es el de las instituciones. De alguna manera, los ciudadanos se guían por conjuntos de incentivos contenidos en las instituciones. Si estos indican que las actividades ilícitas son rentables pues una mayor parte de la población se dedicará a ellas. Así mismo, si las instituciones formales están siendo acechadas por la insurgencia y por grupos de extrema derecha, entonces los incentivos para conducir a la población dentro de la legalidad se debilitan consecuentemente.

Pero quizás la falla mayor de Garay es que tiene una perspectiva de ingeniero sobre los problemas sociales, lo cual los simplifica excesivamente. El esquema social actual es considerado como muy descompuesto y lo único que hace falta es remplazarlo por uno perfecto. No hay una concepción de la historia de los problemas lo cual deja sin perspectiva su surgimiento, excluyendo la posibilidad de que algunos son legados feudo-católicos, muy acendrados por cierto. Dentro de una gran arrogancia intelectual, tampoco hay un recurso a la ciencia política sino que se pretenden reinventar sus categorías desde la perspectiva del economista-ingeniero, con lo cual no hay sino un remedo de política en el análisis.

Los problemas que enfrenta el país

El frente número uno de la crisis que presenta Garay “es la subordinación de lo público a favor de intereses privados privilegiados y excluyentes que han adquirido poder político, económico, cultural y social, de maneras tanto legítima como ilegítima” (p.1). Nótese esta gran suma de los sectores que subordinan lo público en el mismo plano: oligarcas, terratenientes, industriales, financistas, narcotraficantes, clase política, tecnócratas y agentes culturales. Los adjetivos legítimo e ilegítimo están al mismo nivel, lo cual puede conducir a muchos a decir simplemente que no hay diferencia entre ellos y a abusar de los agentes legítimos. No se nos informa de cómo se gobierna en Colombia, de cuáles son las reglas del juego, de cómo se expresa la ciudadanía, del papel que juegan los partidos y otras organizaciones, cuáles son las ideologías tradicionales y de la izquierda, cuál es su aceptación, de cuáles son las salidas posibles a la crisis. Simplemente todos estos sectores se robaron el Estado para sí. Hay un vacío de legitimidad.

Uno puede afirmar que durante el Frente Nacional el Estado tuvo poca legitimidad. La competencia política estaba muy limitada, el país se la pasaba en “estado de sitio”, la justicia era un arma más del régimen para combatir la oposición, la opinión pública no podría expresarse independientemente y la sucesión política estaba arreglada. Gobernadores y

alcaldes eran nombrados arbitrariamente por el Presidente. Existía una centralización despótica y asfixiante. Las restricciones políticas incentivaron la lucha armada. Esa situación cambió radicalmente desde los años ochenta cuando el “establecimiento” comenzó a negociar con la Insurgencia.

A partir de la Constitución de 1991, han podido surgir nuevas fuerzas políticas que están redefiniendo las elecciones presidenciales, las de alcaldes y de gobernadores que implican una reconquista de lo público para los ciudadanos. La opinión pública se puede expresar mejor y presiona por un proceso negociado de paz. Grandes asuntos producen marchas millonarias como la del “No más”. Sin embargo hay quienes continúan recurriendo a la guerra lo cual no es un tema que pueda ser abordados con categorías-denuncia, tan simples que permiten vislumbrar muy poco los problemas.

Las explicaciones que extiende Garay sobre el presente colombiano están vacías: hay “una profunda fragmentación del tejido social”... “una avanzada deslegitimación del Estado”. ¿En qué momento se fragmentó tanto el tejido social? ¿Era más cohesivo antes? ¿Qué le pasó al Estado que se deslegitimó tanto? ¿Acabó de perder el monopolio de la fuerza y de la fiscalidad? ¿Serían las elecciones para alcaldes y gobernadores las causantes? ¿Se acabaron los partidos? ¿Se acabaron los sindicatos?

Viene el frente dos de la crisis que, según Garay, es la deslegitimación del Estado a manos de organizaciones militares de la izquierda primero y después de la derecha. Pero la legitimidad es un problema distinto. Es la percepción sobre si el Estado es aceptado mayoritariamente por el pueblo y se conforma con él. Lo contrario es que la gente no lo acepte y pase a hacerle resistencia pasiva (que logró la expulsión del imperio inglés de la India) o activa (insurrecciones urbanas y militares contra el régimen zarista que le dieron el poder a los bolcheviques en Rusia). Que 3 o 4 organizaciones político-militares no acepten la fuerza del Estado no lo deslegitima, a menos que pierda la guerra. Algunos sectores dominantes se sienten poco representados en el gobierno que busca la paz y le dan apoyo a los paramilitares. Otros sectores de colonos y campesinos pueden sentirse mejor cobijados por la insurgencia. La gran mayoría de los habitantes de municipios sometidos a la guerra quisieran no verse afectados por ninguno de los bandos.

Pero se puede estar seguro que el estado colombiano, con todas sus enormes deficiencias, ha ganado legitimidad en el enfrentamiento con la guerrilla porque a los ciudadanos no les gusta el despotismo de la guerrilla ni de los paramilitares; ellos prefieren la muy imperfecta democracia que nos caracteriza que por lo menos no es impositiva, ni dictatorial, ni fusila a la gente sumariamente y la ha provisto de servicios públicos y sociales. Al pueblo colombiano no le gusta la arbitrariedad, las masacres, los secuestros, las pescas milagrosas, las vacunas, la destrucción de la infraestructura de la energía y el petróleo o el asesinato de indigenistas norteamericanos.

La reforma constitucional de 1991 le ganó legitimidad al estado colombiano porque fue una muy amplia masa de votantes la que eligió a los constituyentes y estos se dieron a la tarea volver realidad la libertad religiosa (8-10% de la población colombiana no es católica y ella obtuvo representación en el Estado y por lo tanto aumentó la legitimidad del régimen político sólo por este hecho). Las negritudes y los indígenas fueron también incorporados de alguna manera a la vida pública y educativa del país, ampliando de nuevo la legitimidad del Estado. Se incrementó además la participación política, se le otorgó más capacidad decisoria a las regiones y municipios, al poder elegir sus mandatarios y transferirles recursos muy importantes, se hizo más accesible la justicia – aunque tiene razón Garay que la impunidad es enorme. Sin embargo, las reformas si han servido para reducirla en alguna

medida y las medidas de restricción de la venta de alcohol en las ciudades han contribuido a reducir las tasas de criminalidad y homicidios. Se contuvieron elementos despóticos de la formación social, como la justicia militar que no pudo seguir siendo utilizada para reprimir a la insurgencia y a la oposición y se fortaleció la justicia civil

Se puede uno preguntar: si este Estado no tiene legitimidad, ¿de cuál disfrutó durante 105 años si el proceso constituyente inicial fue producto de una elección indirecta sesgada por el gobierno regenerador de 1886? Una respuesta es que la Iglesia Católica contribuyó a justificar ideológicamente el régimen cuando Colombia era un pueblo creyente. Después vinieron muchas reformas constitucionales que permitieron la expresión a medias de las fuerzas políticas existentes y, por lo tanto, ampliaron la legitimidad política, pero nunca antes se dio un proceso electoral tan amplio y universal como el de que gozó la Constituyente de 1991. Sus resultados no son despreciables. Entre otros, es casi milagroso que en un período relativamente corto se haya recuperado tanto la vida política municipal en ciudades tan canibalizadas por sus clases políticas como Barranquilla o se haya dado el espectacular renacimiento de Bogotá.

Garay desconoce este aumento de la legitimidad con un argumento no muy lejano al que enarbola la insurgencia para descalificar la Constitución de 1991: que el país es y ha sido siempre una estrecha república oligárquica ahora narcotizada y que el M-19 y los otros grupos insurgentes que negociaron las reformas simplemente “se vendieron”. No es cierto que los datos aportados por la encuesta de Sudarsky den para suponer que la legitimidad del estado colombiano está en crisis (4.2 en una escala de 10 para gobiernos locales y 3.8 para el gobierno nacional) si no se sabe cuál era el dato antes de la Constitución de 1991. Es más: si uno acepta las comparaciones internacionales del trabajo aludido, los colombianos tienen más confianza en su gobierno central que en países como Alemania Occidental (3.3), España (3.6), Argentina (3.3) y está igual que los Estados Unidos (4.2) y Japón (4.0), aunque ellos se caracterizan por demandas de descentralización o tienen preferencias federales.² Desde el punto de vista de confianza en los gobiernos locales Colombia está al mismo nivel que Polonia, por encima de algunos países latinoamericanos (Venezuela, Perú, Argentina y República Dominicana) pero por debajo de todos los países desarrollados. Eso nos indicaría la necesidad de fortalecer mucho más el gobierno local y debilitar el central, algo que se propuso la Constitución de 1991 pero que los gobiernos de turno incumplieron.

Garay hace más confuso el problema cuando la “deslegitimación” no es solo la pérdida del monopolio de la violencia, la justicia y la fiscalidad por el Estado sino también por el uso del Estado por intereses individuales o “grupales” que no reflejan el interés colectivo “perdurable”, que es otra categoría nueva para diferenciarlo del interés colectivo “transitorio”. Ahora no se sabe si esto es injerencia económica indebida en la política, corrupción o ambas.

La corrupción no es un simple problema de “aculturación”, como lo supone Garay, sino de existencia de impunidad, de carencia de controles y balances desde el punto de vista de oposición política y opinión pública, de contralorías igualmente corruptas, de concentración de recursos en los distantes niveles centrales, y en las elecciones basadas en las relaciones de clientela y en la compra de votos. Sin embargo, las elecciones verdaderamente importantes en el país son definidas por el voto de opinión con lo que nos acercamos a los patrones internacionales de la democracia. Si definimos la democracia como la existencia de libertad “negativa”, o sea que ningún grupo pueda imponer enteramente su interés, Colombia ha evolucionado hacia un sistema en el cual los múltiples intereses alcanzan a neutralizarse en alguna medida. No hay campo para que los ingenieros

de almas, como llamara Isaías Berlín a los comisarios estalinistas, impongan despóticamente su pseudo racionalidad.

El frente número tres es un “desarreglo societal profundo” o la pérdida de la convivencia ciudadana. No sabía que los desarreglos podían ser hondos y no entiendo la preferencia por la palabra “societal”. De pronto hay un desarreglo social grande que no profundo. Se han roto las reglas de convivencia ciudadana que deben surgir, según Garay y Rousseau, de un “contrato social entre los miembros de la sociedad”. Nótese de nuevo que se desconoce el contrato social de 1991. La pérdida de convivencia ha invadido todo “el espacio público-colectivo-privado del ordenamiento político social” (p. 3). Deconstruyamos la frase: tenemos un espacio que es público y/o colectivo y al mismo tiempo privado y dentro de él hay un ordenamiento total, político y social o al revés el ordenamiento ocupa dicho espacio que en fin de cuentas contiene mucha cosa. Esto es ventrilocuismo o mejor es la forma como se expresaba Cantinflas. Después Garay desplegará su ingenio para definir un (des)ordenamiento.

A lugar seguido se desatan graves hechos: “con el avance de la erosión de la convivencia ciudadana se va asentando, enraizando y adicionalmente germinando una ‘aculturación’ de la violencia”. En otras palabras: la erosión (de la convivencia) primero se sienta, después tira raíces y finalmente germina una cultura de la violencia o simplemente “acultura” la violencia. De esa aculturación se puede pasar sin dificultad a una “aculturación mafiosa” que resulta siendo la dinámica más profunda de todas. ¿Qué será aculturación? ¿Será que los valores “éticos” de la mafia, la violencia y el rentismo terminan siendo aceptados por todos? Y aquí sí que estamos en un terreno incierto y especulativo pues ¿cómo se conocen los valores morales que guían a 40 millones de colombianos?

El cuarto frente es el del conflicto armado que es relativamente claro y constituye un respiro en el panfleto de Garay. No creo que se pueda derivar de la “problemática tradicional predominante en el campo colombiano”, como dice. No le da suficiente importancia a que el problema que generó las guerrillas fue básicamente político e ideológico: el rechazo violento de los conservadores a las reformas liberales de los años 30 y la guerra civil que desató. En medio de la negociación del conflicto en los cincuenta sólo un grupo comunista no fue tenido en cuenta y de ahí surgieron las FARC que organizaron políticamente a los campesinos desplazados por la violencia, mayoritariamente liberales. Estos se dirigieron a regiones de frontera agrícola donde se constituyeron en su base política. La insurgencia no ha podido penetrar en las regiones de arrendatarios o minifundistas que sería lo que entendemos algunos como la problemática campesina “tradicional” con organización política sino con su parafiscalidad extorsiva.

Después las FARC fueron perseguidas y se fueron fortaleciendo progresivamente con excedentes locales primero, más adelante con secuestros y expansiones a nuevas áreas donde imponían su fiscalidad y finalmente con los tributos a los cultivos y laboratorios de coca y amapola, que es cuando más se han fortalecido. El hecho de que la extrema derecha le hubiera asesinado a todo su frente político en los ochenta le dio preponderancia a su estrategia militar. Si las FARC tuvieran un apoyo político urbano importante, hace ya varios años hubieran impuesto la revolución semi-socialista que tienen en mente. Así mismo, el desconocimiento de una aparente victoria electoral de la Anapo por el “establecimiento” en 1970 dio surgimiento al M-19. El ELN surge como movimiento revolucionario católico siguiendo la dirección cubana. Hay países con mayores desigualdades sociales que Colombia y no tienen el menor asomo de insurgencia, así que esa explicación, tan cara a la izquierda, de que hay guerrilla porque hay desigualdad económica y social, no tiene ningún asidero en la realidad.

El rentismo degenerativo

Garay introduce la categoría del rentismo en forma imprecisa y moralista. Se trata “de la reproducción de prácticas impuestas *de facto* por grupos poderosos en usufructo de su privilegiada posición en la estructura política y económica del país, para la satisfacción egoísta (sic) y excluyente de intereses propios a costa de los intereses del resto de la población y sin una retribución a la sociedad que guarde proporción a (sic) los beneficios capturados para provecho propio” (ps. 10 y 11).

En la teoría económica se le llama renta al ingreso provisto al propietario por un activo físico (la tierra) o financiero (CDT), aunque más precisamente se trata del interés en este caso. Inglaterra se caracterizó por tener una amplia capa de rentistas que ahorran frugalmente buena parte de sus ingresos. Nada inmoral al respecto. Aparecen rentas también cuando algún factor restringe la oferta de un determinado bien, como sería la dotación natural de tierras. Una política represiva que restringe la oferta de determinadas drogas que tienen alta demanda genera rentas enormes. Por última, una política proteccionista impone un impuesto a las importaciones de bienes que se producen localmente, creando una diferencia adicional entre el precio y el costo de producción que capturan los empresarios que es otra renta. No es posible afirmar que todas estas formas de ingreso impidan un desarrollo natural del capitalismo o que sean moralmente condenables por igual, excepto por el narcotráfico.

Muchos estudios históricos han mostrado que en el lejano pasado la tierra en Colombia fue asignada en forma excesiva y utilizada extensivamente por sus propietarios que fueron subdividiendo en herencia o vendiendo y arrendando a personas que la utilizaban mejor que ellos o a narcotraficantes. Hay un legado de esta tradición que se debe combatir y es que la herencia permite justificar ciertos derechos económicos y cargos políticos claves. Creo, junto con Alfonso López Michelsen, que hoy en día la tierra no es un bien escaso frente a una agricultura y una ganadería cada vez más intensivas en capital, insumos químicos y genéticos. Hay sobre-inversión en tierras por parte de los narcotraficantes y su expropiación podría ser la base para una importante reforma agraria.

Por otra parte, la protección mantuvo durante un buen tiempo altas rentabilidades industriales que fueron importantes en la expansión económica bastante continua y exitosa durante 70 años del siglo XX que caracterizó a Colombia.³ Dependerá en adelante de algún comisario decir cuáles industrias son “competitivas”, “productivas-sistémicas” o cuáles son degenerativas, utilizando las categorías de Garay. Podrá decidir también que así como resultaron de prácticas *de facto*, se les puede expropiar de manera similar.

El narcotráfico constituye un negocio nefasto para el desarrollo de una democracia y de una ética basada en el trabajo productivo. Su inmenso tamaño lo hace más del doble en volumen que el negocio cafetero. Ha corrompido y vulnerado una justicia ineficiente de por sí. Se ha vuelto uno de los pocos canales de ascenso para la juventud de los estratos sociales bajos. Ha traído muerte y descomposición a la juventud de ciudades como Medellín y Cali. Financia el contrabando y no paga impuestos. Contribuye con ambos bandos para que intensifiquen la guerra civil que desangra al país; en el caso de la insurgencia, con los impuestos que recibe a cambio de protección y con contribuciones voluntarias por los paramilitares. Es obvio que Colombia ofreció ventajas comparativas para su establecimiento, donde la insurgencia domina una parte importante de la frontera agrícola, la justicia es débil y el régimen político puede albergar intereses delictivos. Que sus valores hayan sido aceptados por toda la sociedad me parece cuestionable e incluso

puede apreciarse que ha generado una saludable reacción social: ha sido perseguido con mayor ahínco en los últimos años, con el resultado de que se ha hecho más costosa su operación en Colombia que en el pasado, desplazando la distribución de las drogas y el lavado de dinero hacia México.

Lo esencial de la categoría de Garay es que el rentismo está gobernado por el egoísmo y es lo que hace degenerativo al capitalismo colombiano. Se trata de una concepción religiosa por no decir pía del orden económico. Es que el capitalismo se precia de ser un régimen basado en el interés individual o sea en el egoísmo, el que debidamente regulado puede terminar haciendo coincidir el interés social con el individual, lo que resulta en la gran civilización alcanzada por Europa, Japón y los Estados Unidos. En todos ellos se forjó un equilibrio entre derechos y deberes de los ciudadanos, el Estado respeta los derechos individuales, defiende derechos de propiedad bajo la idea de justicia y el crimen no paga. Cuando a un obrero se le paga más si produce más, cuando a un inventor se le paga parte de lo que genera su invención por un tiempo prolongado o cuando a un individuo que arroja desechos tóxicos se le clava un impuesto que le hace pagar el costo de limpiar su basura, se está haciendo coincidir el interés individual con el social. Si un empresario organiza un negocio y lo hace prosperar, respeta las leyes laborales y las ecológicas y paga sus impuestos, el gobierno debe favorecer la expansión de su riqueza. No tiene que llamar a Garay o algún otro que le cuente si se trata de un rentista o cuasi-rentista para ahogar el negocio.

Lo terrible en Colombia es que el crimen paga y eso es lo que hace desordenada e invivible la sociedad. Sucede además, según Garay, que el “rentismo” es también aculturable y se convierte “en una fuerza societalmente disruptiva cuando el sistema se encuentra enmarcado bajo un régimen democrático formal y capitalista neoliberal de mercado, predominante a nivel cada vez más global como ocurre en la etapa actual del proceso de globalización” (p.11). Pareciera que cada vez estamos en más crisis “societal” y más sometidos al demonio de la globalización. Pero tratemos de clarificar primero lo que dice la frase: estamos bajo un régimen capitalista neoliberal que es cada vez más global debido a la globalización. Pareciera decir que si no existiera la globalización ni el neoliberalismo el rentismo sería menos disruptivo. Se trata de otro truco de ventrílocuo.

Con todo, la situación es más compleja y sutil. El neoliberalismo se entiende como un proceso de reducción de impuestos, bajas en los gastos públicos sociales y la ampliación del ámbito del mercado en la sociedad. En Colombia se da, por el contrario, una ampliación enorme del Estado, la más grande en toda su historia desde la colonia española hasta el presente – el gobierno central pasa de disponer 10% del PIB al 18.5% entre 1990 y 1999, mientras que el sector público no financiero pasa de 24% del PIB al 36% entre las mismas fechas - datos que se le pasan por alto al investigador. Contrario a lo que afirma Garay, hay también un aumento sin igual del gasto social, desafortunadamente capturado en parte por políticos y por los sindicatos de la educación, la salud y la justicia.⁴ Se da también un aumento de la participación de los impuestos del 9% en el PIB en los ochenta al 14% en la actualidad. La Corte Constitucional ha limitado seriamente los espacios de actividad definidos por el mercado, como el de la vivienda, la educación y el de la salud y lo único que queda de neoliberal es la apertura comercial que fue relativamente moderada y la apertura de capitales que fue quizás más importante que la anterior, pero a la que los proteccionistas no prestan atención.

Para Garay la apertura condujo a la desindustrialización y a la desagriculturación o sea arruinó a algunos de sus rentistas, lo que es un argumento bien ideológico. Pero no es cierto que se perdiera tanta industria ni tanta agricultura en el país; ni siquiera es verdad

que disminuyeron su producto en términos estructurales. Un trabajo cuidadoso de Carlos Felipe Jaramillo⁵ mostró que la agricultura tuvo un cambio estructural importante con la reducción de los cultivos temporales, en particular cereales que se importaron, y un aumento algo compensatorio de los permanentes. Aumentaron mucho los cultivos de exportación como las flores, el banano, frutas exóticas, la palma africana y la caña de azúcar pero también la coca y la amapola. Estas últimas dos obtienen la renta alta y han contribuido a reevaluar el peso y hacer menos competitivas otras exportaciones colombianas.

A los economistas nos enseñó David Ricardo que para un país es mejor importar lo que produce caro y pagarlo con las exportaciones de lo que produce en forma más económica. Es mejor sembrar flores en la Sabana de Bogotá e importar trigo y cebada que tienen productividades bajas en las zonas ecuatoriales. Mientras las flores se ven favorecidas por la carencia de estaciones en el trópico, los cereales se ven perjudicados por la misma razón, en particular porque el calor y la humedad multiplican la presencia de insectos y plagas que atentan contra las raíces de los cultivos. De esta manera los salarios colombianos medidos en unidades de pan serán mucho más altos intercambiando los bienes respectivos que con la autarquía que prefieren Garay, la izquierda armada, la izquierda legal y la derecha nacionalista.

La industria se vio favorecida con la apertura financiera que le permitió modernizarse e inaugurar algunos sectores como las telecomunicaciones, la televisión privada, la de algunos servicios públicos, con base en crédito externo. Sin embargo, el precio del capital bajó tanto que se hicieron inversiones que no eran rentables y que condujeron a una notable sobrecapacidad, caso de las tradiciones industrias consideradas “vacas lecheras” por Rudolff Hommes, como la de bebidas. La traída de capital a su vez contribuyó a la revaluación del peso y a financiar importaciones lo que estrechó el margen de las industrias que competían contra ellas. Entre 1992 y 1996 la industria estaba creciendo a tasas muy altas, lo mismo que toda la economía. Después ha venido la destorcida y el ajuste de la tasa de cambio. El hecho de que el país se torne cada vez más en exportador minero termina por desindustrializarlo también, gracias a las rentas altas de los hidrocarburos, lo que se ha venido a llamar “la maldición de los recursos naturales”.

Una concepción despótica de la democracia

La concepción de Garay sobre la democracia “verdadera” parece simplemente peligrosa porque el autor no cree en la democracia parlamentaria. Afirma que el cabildeo frente al Congreso debe acabarse. No se conoce a qué mecanismo quiere recurrir para sustituir un cuerpo elegido por los ciudadanos para que decida sobre impuestos e influya en la distribución del gasto público.⁶ El Congreso debe ser el escenario principal donde se saldan los intereses de una sociedad. Su lejana razón de existencia fue frenar la tributación despótica de las monarquías sobre la burguesía, algo que puede relacionarse en Colombia con la tributación bajo la pena de secuestro o destrucción de activos que impone la insurgencia. La democracia colombiana será más amplia si no sólo los grupos financiero-industriales, los contrabandistas y las mafias tuvieran influencia sobre el congreso sino que también muchos otros intereses más representativos de un amplio espectro de grupos sociales y con votos eligieran representantes e hicieran cabildeo. Pero en verdad el Congreso colombiano representa adecuadamente a las regiones y a algunos gremios, incluyendo algunos sindicatos nacionales de trabajadores y de maestros, más otros intereses de las clases medias. El cabildeo es un método imperfecto de expresar los intereses de la sociedad, porque se favorecen los que pueden pagar más por los servicios de los políticos, pero no hay ninguno mejor y se puede perfeccionar.

En Colombia el Congreso trabaja mal porque es dependiente del ejecutivo, quien cuenta con la iniciativa legislativa, que lo transa por gasto o burocracia. Tal carácter podría ser mejorado aumentando la independencia de los poderes y la fortaleza de los partidos. En especial se requiere unas reglas que permitan el fortalecimiento de la oposición y faciliten sus relaciones con el gobierno.⁷ Garay pretende que Colombia pase de una democracia clientelista a una democracia directa (p. 51) sin pasar por la democracia representativa liberal. ¿Será eso el verdadero Estado Social de Derecho? Sin embargo, si se amplía el espectro político y ganan terreno los intereses cívicos, si ganan mayor representación las clases medias y se fortalece la oposición, entonces vamos a tener un sistema en donde habrá más política programática y menos mecánica que aún así es una forma de democracia. La democracia clientelista es mejor que un sistema autoritario donde un comandante o un comité central favorecen algunos intereses a costa de otros sin una discusión entre ellos, que es la que introduce elementos de racionalidad en la política y desarrolla la capacidad de lograr compromisos que están a la base de la paz social.

La ciudadanía se logra en el capitalismo mediante la educación y la acción política. Solo los individuos y sectores que logran expresar simbólicamente sus reivindicaciones, que logran elaborar programas políticos y se dan herramientas de organización, pueden progresar en este sistema competitivo. Esto es cierto en cualquier país avanzado donde sus minorías han ganado espacios políticos por medio de su organización y lo es también para Colombia. Pretender substituirlos o hacerlo desde arriba por una organización armada o por un intelectual no contribuye a la democracia. Es más bien paternalismo que, como lo dijo Kant, es necesariamente despótico.

La peligrosa globalización

La posición de Garay frente a la globalización es ambigua. Le encuentra ventajas pero no quiere aceptar que el país debe adaptarse y abrirse al cambio tecnológico para poder aumentar su comercio y su desarrollo. De entrada cree que va a salir maltratado por la globalización y aconseja que nos “auto-excluyamos” para construir una nueva estructura perfecta y ahí sí entrar de lleno. Creo que la globalización implica tanto oportunidades como riesgos. Es más perjudicial pretender excluirse de un proceso que marcará la marcha de todas las naciones, quiéranlo o no. Hay países que no la quieren aprovechar, como Irak, Irán, la India o Pakistán que se mantienen anquilosados y burocratizados bajo barreras a la inversión de capital y altos aranceles. En India hay sectores que perciben como “peligroso” que se desarrolle la industria del software que posee una importante tradición matemática. O Cuba que cada vez que cree que va a surgir un nuevo capitalista en un sector distinto al hotelero lo expropia con impuestos. Quizás haya muchas cosas por negociar con los inversionistas extranjeros y con los socios comerciales, que se tornarán en agentes que juegan dentro de la política interna. Se debe pensar en una estrategia de inserción que pase por una asociación regional o de atraer ciertas inversiones extranjeras que puedan desarrollar un sector de especial beneficio para el país. Se requiere de una actitud abierta frente al resto del mundo.

La China, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Filipinas, Chile, Costa Rica y México en América, han aprovechado bastante bien la globalización, tanto del comercio como de los flujos de capital, para avanzar mucho más su desarrollo que los países paralizados por el proteccionismo y el nacionalismo. La apertura no significa en sí misma una pérdida de soberanía y no ha debilitado para nada la de la gran China, por ejemplo. En cada uno de ellos han avanzado fuerzas democráticas por el simple hecho que el desarrollo económico desarregla las bases de los regímenes despóticos y fortalece a los

trabajadores y a las clases medias. Además, si se participa en un mercado global deben adoptarse convenciones internacionales sobre la defensa de los derechos humanos, la prohibición del trabajo infantil, la persecución del crimen internacional y del genocidio y muchas otras ideas progresivas que se incubaron dentro del abominable “hegemón”.

La globalización no implica tampoco que no pueda existir una mejor distribución del ingreso o un crecimiento del tamaño del Estado y de sus gastos sociales, hechos que dependen de la economía política de la tributación interna y de los acuerdos nacionales. Es notorio la ausencia de discusión sobre un asunto tan estratégico como la tributación cuando se gastan tantas peroratas contra la globalización y el neoliberalismo, siendo los impuestos y su nivel, quien los paga y en qué cuantía, cómo se gastan y cómo alcanzan a los ciudadanos, los factores que definen en parte la distribución de la renta.

Creo personalmente que hay que tener cuidado con la apertura financiera, en tanto puede generar distorsiones en el precio del capital, reduciéndolo al nivel internacional cuando internamente su precio debe reflejar una mayor escasez del factor. De lo contrario se harán inversiones poco productivas que no van a poder asumir el pago del servicio de las deudas contraídas, como se ha manifestado con la crisis internacional de financiamiento a que se vieron abocadas las economías llamadas emergentes entre 1997 y 1999. Los mercados de capital pueden ser exuberantes unas veces y entrar en pánico seguidamente. Pero es importante contar con el ahorro externo y con la inversión extranjera para acelerar el tránsito hacia un mayor nivel de complejidad productiva y de servicios, de tal modo que el país desarrolle más rápidamente su comercio exterior, su empleo y su productividad.

Los remedios de la crisis social

Uno debiera preguntarse cuáles de los problemas actuales surgen con el capitalismo y la inserción del país en el mercado mundial y cuáles son heredados del pasado. Los derechos de propiedad excesivos y el mal uso de la tierra surgieron con la colonización española. El sistema de ley formal, ineficiente y conducente a la impunidad tampoco es nuevo y es otro legado hispánico, reafirmado en la Constitución de 1886 por el jacobinismo católico. El colapso de la ética católica y el surgimiento de la irresponsabilidad individual puede adscribirse al fracaso de la modernización que no contó con éticas mejor adaptadas al capitalismo, como fueron el luteranismo y el calvinismo en el norte de Europa, el catolicismo del Opus Dei en España, el ideario liberal o una ética agnóstica derivada de la racionalidad en otros países. Si se desconoce la historia es mucho más fácil equivocarse de problema.

Uno debe pensar la sociedad como desenvolviéndose de acuerdo con leyes naturales y entender, con Douglass North, que la ruta que tome depende del pasado. No ayuda mucho a comprender lo que sucede cuando se piensa en términos siniestros, degenerativos y morales de la sociedad y se le fijan arbitrariamente metas perfeccionistas, como lo hace Garay. Es de dudar que se arregle la sociedad con los remedios que sugiere al final de su panfleto. Se trata de fórmulas vacías, las antítesis de las fallas sociales, que él llama principios y valores éticos “fundacionales”.

El primero valor “fundacional” es la observancia de los derechos humanos y el derecho a la vida. Muy loable, pero, ¿cómo se hace? Pasa por silenciar las armas de la extrema derecha y las de la insurgencia, por el desarme de la población, por las restricciones sobre el consumo de alcohol, por la educación en los valores liberales y por anular el incentivo de que el crimen paga. Pero cuando no se cree en la democracia liberal es difícil educar al prójimo en sus valores.

El segundo valor es la plena vigencia de la ley y es muy obvio que es complicado y difícil: pasa por modernizar y hacer rigurosa la enseñanza de la ley, sólo para comenzar. Requiere de una simplificación y racionalización del sistema de justicia y mucho rigor para implementarlo, en especial vencer la ideología de que el crimen no implica responsabilidad individual. Exige muchas más cárceles en buen estado.

El tercer valor “fundacional” es la preponderancia del bien común en contraste con el ventajismo nacional, pero hay que tener cuidado con los que se comprometen tanto con el bien común que justifican medios criminales para justificar sus loables fines. A algunos se les da por sacrificar la libertad en aras de la igualdad, todo a la brava. Otros conocen lo que el prójimo necesita y se lo hacen comer. Lo que ha hecho siempre la democracia liberal es tratar que los intereses individuales se neutralicen mutuamente, de lo que va surgiendo la noción del bien común. En política surge más claramente cuando existen partidos fuertes con ideologías que proponen a la población, compitiendo con las de otros partidos. En Colombia, por el momento, solo se avizora en los gobiernos locales que han surgido de los movimientos cívicos y que han recuperado la política de las organizaciones clientelistas.

Garay lo expresa en su lenguaje peculiar: “se requerirá transitar de una concepción *individual individualista* a una *individual societalista*”. Quizás quiera decir que se requiere un individualismo responsable. El problema es que Garay se inventa categorías arbitraria, innecesaria e imprecisamente. Hay muchos indicios de que esos valores de responsabilidad están surgiendo frente a tanto dolor que produce la violencia de guerrillas y paras. Si se habla de valores, estos surgen tanto en la ética católica enfrentada a una crisis que la hace renovarse, como en los movimientos cristianos y protestantes y en las clases medias educadas que han adquirido estos valores en la academia. No existe simplemente un acomodamiento a los valores mafiosos sino en los sectores que viven del narcotráfico.

Los postulados de acción social propuestos por Garay son los contrarios a los encontrados en el análisis de los problemas presentados al principio, simplemente negándolos. De la deslegitimación pasamos a la legitimación del Estado, todo con reingeniería pero sin fuerzas políticas detrás. De la falta de democracia se “debe” pasar a una democracia participativa y deliberante lo que es un “propósito privado-colectivo-público” (sic), pero sin parlamento ni cabildeo, las formas primigenias de la democracia en Occidente. Del rentismo pasamos a “una verdadera cultura empresarial” porque la existente debe ser de mentiras y a “un contrato societal para la competitividad sistémica”. ¿Qué significará la competitividad sistémica? Posiblemente que se compite a fondo por todo el sistema. ¿Se trata quizás de un capitalismo regulado por la social-democracia? No, no se especifica de qué se trata. Esta es la visión de un planificador ingenuo que se encuentra con los planos de un aparato imperfecto y procede a reelaborarlos, sin pensar que está tratando una compleja realidad social que no mecánica.

El último principio es “un acuerdo societal sobre principios rectores de la justicia distributiva” que le da importancia a impulsar el principio de la igualdad. Este es un principio liberal muy importante que, por ejemplo, estuvo por fuera de la Constitución de 1886. Pero lo ignora la Corte guardiana de la Constitución de 1991 al fallar que el Congreso y ella misma pueden contar con regímenes privilegiados de pensiones, pero también en cientos de fallos donde lo que deciden sólo aplica al individuo demandante y no se puede generalizar. En esta sociedad cada grupo de interés pretende obtener un tratamiento especial. Se trata de otra herencia hispánica y colonial que concebía la sociedad dividida en castas, a cada una de las cuales le correspondía un tratamiento distinto por parte del Estado y de la ley. Es por eso que el régimen tributario está lleno de huecos y privilegios y también

por lo que las cárceles están segmentadas, desde las casas fiscales, pasando por los pabellones de lujo hasta el hacinamiento más cruel para el pequeño crimen. ¿Será un acuerdo corporativo entre gremios, sindicatos y la guerrilla a los que ésta llama ingenuamente “sociedad civil”? O ¿Será político y universal?

No dice Garay cómo va a hacer para que los propietarios de la tierra acepten pagar impuestos a la propiedad que permitan la modernización y disminuir la desigualdad social en 700 municipios colombianos, si se excluyen los municipios cafeteros. Ni cómo va a hacer para que los empresarios tributen lo que les corresponda y no lo que quieran. ¿Será por medio de la negociación democrática o por medio de la expropiación despótica? Hay amplios sectores de clase media que pagan cumplidamente sus impuestos o estos les son retenidos. Es notorio que en ciudades como Barranquilla, Medellín y Bogotá la gente paga más impuestos voluntariamente cuando tiene la confianza de que no se los robarán y se invertirán a favor de los intereses comunes, mostrando las enormes posibilidades de la tributación democrática; hay también los políticos que están operando en esa dirección. Si se rompe el círculo vicioso del clientelismo y la corrupción, la gente estará más dispuesta a tributar, simplemente porque le conviene. Pero de eso, del aquí y ahora y de los gérmenes de lo que puede ser un buen país no informa nada Garay.

Eso es precisamente lo que se requiere: estrategias que logren desarrollar y hacer dominantes los valores liberal-democráticos que ya existen dentro de amplias capas de la población, que fortalezcan los movimientos políticos que los defienden y que tienen interés en una sociedad más igualitaria y más próspera que la actual.

¹ Luis Jorge Garay, **La construcción de una nueva sociedad**, Separata Revista **Cambio**, Bogotá, 1999.

² John Sudarsky, **El capital social en Colombia**, DNP, 1999, Separata No. 4, p. 34

³ A pesar de que Garay acusa a la industria de rentista, resiente que se la haya quitado una parte de la enorme protección arancelaria de que gozó en el pasado.

⁴ Según Martha Sánchez Segura, el gasto social constituía el 15.6% del PIB en 1996 contra 9.2% en 1990 y 7.6% en 1980. **Evolución del gasto social, 1980-1996**, Departamento Nacional de Planeación, 1997.

⁵ Carlos Felipe Jaramillo, **Apertura, Crisis y Recuperación**, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1994.

⁶ No es casual que diga que los problemas sociales hay que erradicarlos en vez de solucionarlos (p. 55)

⁷ La observación es de Rafael Orduz en torno a este documento.